



Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 8 reales al mes para esta capital, y 10 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan sin novedad en esta Corte en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

CIRCULAR N.º 317.

El Ilmo. Sr. Director general de Correos con fecha 17 de junio último me transcribe la Real orden que sigue:

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación ha comunicado al de Hacienda el 29 de mayo último la Real orden siguiente:

«Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de lo manifestado por las Direcciones generales de Contabilidad y Venta pública en las comunicaciones que V. E. se sirvió trasladar de Real orden á este Ministerio en 5 del actual, acerca de las consecuencias que habrían de originarse al servicio público de llevarse á efecto la prohibición de remitir por el correo las cuentas mensuales respectivas á todos los ramos de la Administración y los efectos pertenecientes á la Venta pública; y conformándose S. M. con lo expuesto en su virtud por la Dirección general de Correos, se ha servido declarar exceptuados de la prohibición establecida por la Real orden de 27 de marzo último, los paquetes de cuentas y documentos de contabilidad que las dependencias del Estado envían á los diferentes centros directivos, siempre que se arreglen en sus dimensiones á lo prescrito en la Real orden de 11 del actual; habiéndose servido asimismo mandar se manifieste á V. E. que el ramo de Correos no puede, por ahora, admitir para su remisión los documentos de la Venta pública sin que se resienta el servicio preferente de la correspondencia.

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes.

Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín oficial para conocimiento de quienes corresponda. Orense julio 2 de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

CIRCULAR N.º 318.

Por el Ministerio de la Gobernación del Reino se me comunica con fecha 20 de junio último la Real orden siguiente:

Varias personas han recibido cartas que se suponen ser del Reverendo Obispo de Mallorca, residente accidentalmente en Grapada, invitándolas á que contribuyan con donativos para la reedificación de su Iglesia, que se dice haber sido incendiada en el año último. Noticioso de ello dicho Prelado, ha expuesto ser falso que haya expedido ninguna pastoral con semejante fin, como también que se haya incendiado su Iglesia; y que habiendo denunciado tan escandaloso hecho á la Autoridad competente, se había formado la correspondiente causa.

De Real orden, comunicada por el señor Ministro de la Gobernación, lo digo á V. S. para que lo ponga en conocimiento del público con objeto de evitar sea sorprendida su buena fe.

Lo que he dispuesto se inserte para conocimiento del público, y para que nadie se deje sorprender por los que pretendan abusar de su credulidad. Orense julio 2 de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

CIRCULAR N.º 319.

El Ilmo. Sr. Director general de seguridad y orden público me dice en 21 de mayo último lo siguiente.

En virtud de Reales órdenes expedidas por el Ministerio de la Guerra han sido rehabilitados en sus respectivos empleos Don Cristóbal Linarés Bernar, capitán que fué del batallón provincial de Gerona y D. Damian Omlin, teniente coronel graduado, capitán que fué del regimiento lanceros de Villaviciosa; y declarados baja definitiva en el ejército D. Manuel Vacaro Vazquez, capitán graduado, teniente de infantería destinado al batallón provincial de Almería y D. Victor Taboada Rodriguez, subteniente de infantería del ejército de la Isla de Cuba. Lo comunico á V. S. para los efectos

correspondientes, y á fin de que los dos últimos individuos no aparezcan en punto alguno de esa provincia con un carácter militar que han perdido con arreglo á la ordenanza y disposiciones vigentes.

Lo que se inserta en este periódico oficial para conocimiento del público. Orense 2 de julio de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

CIRCULAR N.º 350.

El Ilmo. Sr. Director general de seguridad y orden público me dice en 25 de mayo último lo siguiente.

A solicitud del Caballero Carlos Baratta, propietario en Moravia, ha acudido el Ministro Plenipotenciario de Austria al Gobierno de S. M., pidiendo se adquirieran noticias acerca de la rama de la familia Baratta ó Barata que se halla establecida en España, y acerca del parentesco que exista entre ella y aquel; pues indicando la tradición de familia que una rama de la misma se domicilió aquí en tiempo en que estaban unidas las Coronas de España y Nápoles, parece probable que los que actualmente llevan este apellido en nuestro país, sean del mismo origen que los de Austria. En su consecuencia, espero que V. S. se servirá manifestar á este Ministerio si reside en esa provincia algun individuo de la indicada familia, expresando su nombre, los de sus ascendientes y cuantos datos pueda adquirir sobre el particular.

En cumplimiento del anterior inserto, espero que los señores Alcaldes de esta provincia averiguarán si existen en sus respectivos distritos algunos individuos que pertenezcan á la familia citada de Baratta ó Barata, noticiándolo á este Gobierno en el término de ocho días, con expresión en caso afirmativo de sus nombres y mas particulares que se reclaman. Orense 2 de julio de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

CIRCULAR N.º 351.

Siendo necesario saber la residencia actual de D. José Ugarte, Gobernador que fué de la provincia de Leon, espero que los señores Alcaldes de ésta y el Comisario de vigilancia respecto á la comprensión de esta capital me manifestarán en el pre-

ciso término de ocho días si existe dicho sugeto. Orense julio 2 de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

CIRCULAR N.º 352.

Por el Juzgado de primera instancia de Ponferrada se está siguiendo causa criminal de oficio en averiguación de los autores del hurto de una yegua, de 14 á 15 años de edad, de siete cuartas de alzada poco mas ó menos, pelo negro y cabeza grande, propia de Santos Rodriguez, vecino de Villalibre en dicho partido. En su consecuencia encargo á los Sres. Alcaldes, Guardia civil y empleados de vigilancia procuren averiguar el paradero de la expresada yegua, y caso de conseguirlo remitirla con la persona en cuyo poder se encuentre, á disposición del referido Juzgado ó de este Gobierno. Orense 2 de julio de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

CIRCULAR N.º 353.

Ignorándose el paradero de Juan Vizcaino que en la primavera del año último ha salido del pueblo de Castrocontrigo en la provincia de Leon para esta, con objeto de pordiosear; los señores Alcaldes me manifestarán en el término de ocho días si dicho sugeto cuyas señas se expresan á continuación, existe ó ha fallecido, remitiéndome en este caso la partida de su defunción. Orense 2 de julio de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

Señas.

Edad 60 años; estatura regular, nariz corta, pelicano, gangoso y sordo; vestía calzon viejo color pardo, y sayo de lo mismo y una manta vieja de lana.

Número 354.

En la Gaceta núm. 180 del martes 29 del actual se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

En virtud de las razones que me ha espuesto mi Ministro de la Gobernación, oído el Consejo Real, sobre la conveniencia de reformar en alguna de sus disposiciones el reglamento de 30 de diciem-

bre de 1846 para proceder dicho cuerpo en los negocios contenciosos de la administración, y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente:

1.º Se tendrá por abandonado todo pleito cuyo curso desde la publicación del presente Real decreto en adelante se detenga durante un año por culpa de las partes interesadas. En este caso declarará el Consejo caducada la demanda y consintida la orden gubernativa que hubiese motivado el pleito.

2.º En los pleitos detenidos por el tiempo señalado en el artículo anterior y cuya detención haya comenzado antes de la publicación de este Real decreto, fijará el Consejo un plazo prudencial, atendiendo a las circunstancias de cada asunto. Si durante este plazo no promoviesen el curso de un pleito detenido cualquiera de las partes, se entenderá que ambas desisten de sus respectivas pretensiones, y el Consejo declarará igualmente caducada la demanda.

3.º Las reglas anteriores no son aplicables a los pleitos en que uno ó mas particulares litiguen con la Administración.

4.º Se guardará lo dispuesto por el art. 273 del reglamento, solo cuando el heredero aproveche por todo el tiempo que la ley le concede el beneficio de deliberar. En otro caso, la suspensión de los términos por muerte de alguna de las partes será de treinta días, contados desde que el heredero, expresa ó tácitamente, hubiese aceptado la herencia, á no ser que desde la aceptación faltasen menos de treinta días para concluir el tiempo por el que la ley concede el expresado beneficio.

5.º Admitida la apelación por un Consejo provincial, éste remitirá siempre los autos originales al Consejo Real, quedándose con el testimonio necesario para llevar á efecto la sentencia, si no hubiere acordado expresamente suspender la ejecución.

6.º Cuando el Consejo provincial no admita una apelación, podrá la parte interesada recurrir en queja ante el Consejo Real. Interpuesto en forma este recurso, la Sección de lo Contencioso mandará al Consejo provincial que informe con justificación, y en vista de todo confirmará ó revocará la providencia del inferior.

7.º El demandado podrá contestar á la demanda en el mismo escrito en que proponga excepción dilatoria, ó en escrito separado, siempre que los presente dentro del término de veinte días que señala el reglamento.

Las excepciones dilatorias no interrumpirán el curso ordinario de la demanda interin no recaiga providencia favorable á alguna de ellas.

8.º En los negocios de primera y única instancia ante el Consejo se reservará al pleno la consulta sobre cualquier excepción de incompetencia.

9.º La misma regla se guardará en segunda instancia cuando se funde la declaración en el supuesto de que el asunto correspondiera á la jurisdicción ordinaria ó á cualquier otra jurisdicción especial.

Cuando la declaración se funde en que el negocio corresponde á la administración activa ó en cualquier otro motivo que no sea el anteriormente expresado fallará la sección lo que estime justo.

10. La sección de lo contencioso fallará también, sin ulterior recurso, estatuando ó desestimando las excepciones de litis, pendencia y de falta de personalidad.

11. El término para dictar ó consuntar sentencia definitiva empezará á correr desde el día en que acabe la vista del pleito.

12. En los Reales decretos que se expidan para cada pleito se expresarán los nombres de los consejeros que hubieren tomado parte en la consulta elevada al Gobierno.

13. Los Consejos provinciales, en

todos los casos no comprendidos en su reglamento de 1.º de octubre de 1843, se observarán:

Primero. El reglamento del Consejo Real con las disposiciones posteriores que le suplen ó modifican.

Segundo. El derecho común.

14. Serán obligatorios para todos los Ministerios y aplicables á las resoluciones de los mismos las disposiciones dictadas respecto del de Hacienda en mi Real decreto de 21 de mayo de 1853.

15. El reglamento de 30 de diciembre de 1846 se entenderá derogado en lo que no esté conforme con el presente decreto.

Dado en Aranjuez á 20 de junio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense: 2 de julio de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

Número 353.

En la Gaceta número 177 del sábado 26 de junio se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES DECRETOS.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Gerona y el Tribunal de Marina de Mataró, de los cuales resulta:

Que en el indicado Tribunal de Marina se siguió pleito entre Doña Cristina Fabregas, viuda del piloto D. Cristóbal Comas y vecina de Lloret, y D. José Esquen, también piloto y de la misma vecindad, contra quien pidió la primera que se declarase exenta de la servidumbre que pretendía imponerle en su casa, con un balcón con que Esquen sustituyó la ventana que tenía en la fachada de otra casa contigua, al reedificar esta, toda vez que desde la barandilla del nuevo balcón no median tres palmos regulares á la ventana de la fachada de la casa de la demandante y con él la estorba la vista de la calle pública y demas inmediatas, facilitando además el paso á la indicada ventana, por lo cual, interponiendo la acción negatoria y apoyándola en lo dispuesto en el art. 46 de las Ordenanzas de Sanctacilia, concluyó solicitando que se le condenase á quitar y tapiar enteramente el balcón.

Que Esquen se opuso á la demanda, manifestando que la citada Ordenanza se hallaba en desuso, y el nuevo balcón se había construido apartando su abertura mas de lo que estaba de la antigua ventana de su casa y colocando la losa ó base de la misma á la misma distancia que antes mediaba de la ventana de la demandante, con la circunstancia de que el Ayuntamiento de la villa aprobó lo ejecutado, sin mas novedad que hacerle colocar frente a la jamba del balcón, en su parte lateral á la pared medianera, un enrejado que impidiera el paso á la ventana de la demandante, y prohibiéndole por último introducir alteración alguna en lo así ejecutado.

Que seguido el pleito por todos sus trámites, reayó sentencia, que fué notificada en 12 de diciembre de 1857, en la cual, habida consideración á la acción que se ventilaba, á que la Ordenanza de que se ha hecho mérito dispone que nadie pueda hacer ventana en cantón y pared cerca de su vecino, si este ya tuviese otra allí, á no alejarse de ella y del cantón seis palmos de distre, y á que la ordenanza pertenece al derecho escrito municipal del Principado y no está aboída ni puede conceptuarse en desuso, por mas que haya dejado de tener cumplimiento en algunos

ó muchos casos particulares, mientras que sobre las decisiones contrarias no haya recaído aprobación tácita ó expresa de la suprema potestad; se condenó á Esquen á que en el término de tres meses hiciese desaparecer el balcón, dejando la casa contigua enteramente libre de aquella servidumbre.

Que el mismo día se recibió en el Tribunal de Marina un exhorto del Gobernador de la provincia, en que, de acuerdo con el Consejo provincial, le requería de inhibición, invocando las leyes de 3 de febrero de 1823 y 8 de enero de 1815, é insertando una comunicación del Ayuntamiento de Lloret, en que había pedido al Gobernador que promoviese competencia, fundándose en que se trataba de una cuestión de policía urbana, toda vez que habiendo modificado Esquen las dos fachadas de su casa con gusto y elegancia, abriendo en una de ellas un hermoso balcón con barandilla en vez de la ventana que de antiguo tenía y noticioso de la oposición que hacia Doña Cristina Fabregas, acudió después de celebrar juicio de conciliación, en que no hubo avenencia, y antes de la demanda, á la Corporación municipal, para que se sirviera consignar si merecía su aprobación, recayendo esta de conformidad con el Arquitecto de la provincia, quien aconsejó la interposición de ciertas barritas que impidiesen la comunicación del balcón hacia la parte de la casa contigua; con la circunstancia de que después de cumplimentado este acuerdo y abierto ya el pleito, expuso Esquen al Ayuntamiento que tal vez podría convenirle quitar el trozo de balcón interceptado, á lo cual se resolvió por unanimidad que se abstuviera de hacer novedad alguna, siendo además de notar que la abertura del balcón estaba arreglada á las ordenanzas municipales aprobadas por el Gobernador, durante el litigio, en 15 de mayo de 1857, en que se fija dos palmos la distancia menor que ha de haber de la abertura de una casa al centro de la pared media de la contigua.

Que el Tribunal de Marina se declaró competente, sosteniendo que se trataba de una acción negatoria de servidumbre que habria de resolverse con arreglo á las Ordenanzas de Sanctacilia, en atención á que las de 1857 no eran conocidas cuando se empezó el litigio, y habiendo insistido el Gobernador, previo segundo informe del Consejo provincial, resultó esta competencia.

Visto el art. 74 de la ley de 3 de febrero de 1823, segun el cual corresponde á los Ayuntamientos desempeñar, en lo que no se oponga á la misma ley, cuantos objetos les estan encomendados por las leyes, reglamentos ó ordenanzas municipales:

Visto el art. 1.º 6, párrafo 3.º de la ley de 5 de julio de 1856, en que se da fuerza ejecutiva á los acuerdos de los Ayuntamientos sobre los reglamentos y disposiciones para la ejecución de las ordenanzas municipales:

Visto el art. 153 de la misma ley, en que se establece que corresponde al Alcalde dirigir todo lo relativo á policía urbana y rural, dictando al efecto los bandos y disposiciones que tuviere por convenientes, conforme á las ordenanzas y resoluciones generales del Ayuntamiento en la materia:

Visto el art. 74, párrafo quinto de la ley de 8 de enero de 1843, declarada en todo su vigor por Real decreto de 16 de octubre de 1846, que encarga al Alcalde, como administrador del pueblo y bajo la vigilancia de la Administración superior, el cuidado de todo lo relativo á policía urbana y rural, conforme á las leyes, reglamentos y disposiciones de la Autoridad superior y ordenanzas municipales:

Visto el art. 81, párrafo primero y el cuango de la propia ley, que señalan entre las atribuciones de los Ayuntamientos las de deliberar, conformándose con las leyes y reglamentos, sobre la formación de las ordenanzas municipales y reglamentos de

policia urbana y rural, y sobre la formación y alineación de las calles, pasadizos y plazas:

Visto el art. 9.º de la ley de 2 de abril de 1815 que dispone que los Consejos provinciales actuarán, oirán y fallarán como Tribunales en las cuestiones relativas á todo lo contencioso de los diferentes ramos de la Administración civil, para los cuales no estab ezcan las leyes juzgadas especiales.

Considerando:

1.º Que la demanda entablada por Doña Cristina Fabregas en 29 de octubre de 1856, como dirigida contra la obra exterior de una casa autorizada por providencia del Ayuntamiento del mismo día que aprobó la forma en que se ha llevado á efecto, tiende á que se anule ó reforme esta providencia, dictada en materia de la competencia de la Administración, segun las disposiciones sucesivamente citadas, por lo cual es manifiesto que el Tribunal de Justicia no pudo admitirla, sin abrogarse sobre los actos de la Autoridad administrativa una facultad de inspección y censura que solo compete al superior jerárquico.

2.º Que si bien no puede negarse á la demandante el derecho de reclamar ante los Tribunales de justicia la indemnización correspondiente, por razón de los derechos que la construcción perjudique si tales derechos existiesen, esta reclamación debe dejar á salvo todos los actos de la Autoridad administrativa dados en uso de atribuciones legítimas; de los cuales, solo tienen acción para alzarse ante la misma Autoridad en la via y forma procedentes:

Oído el Consejo Real, Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en Aranjuez á 20 de junio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Gerona y el Juez de primera instancia de Olot, de los cuales resulta:

Que en 15 de abril de 1857 acudieron Salvador Frías y otros propietarios y vecinos de Besalú á su Ayuntamiento, en nombre de todos los poseedores de huertas del término, quejándose de los obstáculos que á manera de represas habían puesto hacia algun tiempo en la acequia del molino los dueños de unas ruedas hidráulicas, impidiendo la corriente natural de las aguas, que en ocasion se desbordaban por las márgenes de la acequia, causando daños de consideración, y concluian pidiendo que se acordase la destrucción de las indicadas represas, dejando la acequia en el estado que antes tenía:

El Alcalde de Besalú, previa instrucción de expediente, y conforme con el parecer de los peritos y del Síndico del Ayuntamiento, acordó como se pedia, dando comision al efecto al maestro de obras de la villa:

Que en 5 de mayo siguiente acudieron D. Pedro Subirós y D. Joaquin Ferrer con igual queja respecto á los daños que causaban las indicadas represas en un molino que poseen los exponentes, y en que se satisface al consumo de harinas necesario para la villa; y el Alcalde, conforme también con el dictamen de los peritos mandó que se removiesen por los mismos reclamantes los obstáculos que se oponian al libre curso de las aguas hasta que llegaran en cantidad suficiente para las tres piedras y escañador que necesitaba el comun, cuidando de no privar de riego á las huertas:

Que en tal estado, D. José Bober y demas dueños de las ruedas hidráulicas de que se viene hablando, interpusieron un interdicto ante el Juez de primera instancia en 25 de junio del propio año contra los Sres. Subirós y Ferrer, por cuya orden dijeron que se habían quitado en 1.º del

actual junio á pesar de haberlo impedido el Teniente de alcalde en aquel día, ciertas maderas y piedras que levantaban las aguas dando movimiento á las referidas ruedas hidráulicas para facilitar el riego de sus huertos; y añadiendo que aunque el hecho de que se quejaban se hubiese ejecutado en virtud de providencia del Alcalde, este al dictarla se extralimitó de sus facultades, y los ejecutores se excedieron del límite de lo mandado:

Que el Juez, recibida información sumaria del hecho, dió auto restitutorio; pero habiendo acudido Subirós y Ferrer al Gobernador de la provincia, esta Autoridad promovió y sostuvo la presente competencia, previos informes del Consejo provincial y también del Alcalde de Besalú, quien con remisión del oportuno expediente, manifestó que, no solo habían mediado las reclamaciones que en el mismo constan, sino otras extraoficiales, respecto á la cuestión en que recayeron sus providencias administrativas:

Vista la Real orden de 22 de noviembre de 1836, que encarga á los Jefes políticos (hoy Gobernadores) el cuidado de que se observen los reglamentos, ordenanzas y disposiciones superiores relativas á la conservación de las obras, policía, distribución de aguas para riegos, molinos y otros artefactos; disponiendo que los Jueces de primera instancia conozcan de todos los negocios contenciosos de esta especie, hasta la creación de Tribunales contencioso-administrativos:

Vista la Real orden de 20 de julio de 1839, que encarga á los expresados Gobernadores y á los Alcaldes de los pueblos el puntual cumplimiento de lo que les está respectivamente prevenido en la Real orden anterior:

Visto el art. 9.º de la ley de 2 de abril de 1845, en que se dispone que los Consejos provinciales entiendan en todo lo contencioso de los diferentes ramos de la Administración civil para los cuales no establezcan las leyes Juzgados especiales:

Vista la Real orden de 8 de mayo de 1839, que excluye los interdictos posesorios siempre que puedan dejar sin efecto las providencias de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en materia de sus legítimas atribuciones:

Considerando:

1.º Que tratándose de la distribución de aguas con destino á riegos y molinos entre un común de partícipes, es incontestable según las Reales ordenes de 22 de noviembre de 1836 y 20 de julio de 1839, y la ley de 2 de abril de 1845, respectivamente citadas, la competencia de la Administración en la línea gubernativa y en la contenciosa, para regular y dejar atendidos constantemente los intereses colectivos ó derechos encontrados y recíprocos de aquellos, conforme á las ordenanzas, ya escritas, ya tradicionales ó consuetudinarias y demás disposiciones que rijan sobre la materia.

2.º Que por tanto si Rober y los otros dueños de las ruedas hidráulicas de que se ha hecho mérito, se creían agravados por abuso ó error de las providencias dadas por la Autoridad administrativa en el negocio ó exceso en su cumplimiento, han debido acudir con sus reclamaciones á la propia Autoridad ó á la superior del mismo orden, pero no al Teniente Alcalde de Besalú, que no reúne esta circunstancia, y menos á la jurisdicción ordinaria por medio del interdicto que excluye terminantemente en tales casos la Real orden además mencionada de 8 de mayo de 1839, sin perjuicio de entablar en su tiempo y lugar la vía contenciosa ante el Consejo provincial, y de recurrir también á la Autoridad judicial en el juicio de pertenencia que pudiera ser procedente:

Oído el Consejo Real, Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en Aranjuez á 20 de junio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

REALES ORDENES.

Administración.—Negociado 6.º

Remitido á informe de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo Real el expediente sobre autorización para procesar á D. Francisco Fernandez Orejudo, Alcalde que fué de la villa de Rena, han consultado lo siguiente:

«Estas Secciones han examinado el expediente en virtud del que fué denegada por el Gobernador de la provincia de Badajoz al Juez de primera instancia de Villanueva de la Serena autorización para procesar á D. Francisco Fernandez Orejudo, Alcalde que fué de la villa de Rena, por haber causado la muerte de Agustín Rodríguez en defensa propia y en el acto de ir en su persecución.

Del expediente resulta:

Que en la madrugada del 8 de febrero de 1857, D. Francisco Fernandez Orejudo, Alcalde de Rena, se presentó al Juez de primera instancia de aquel distrito ofreciendo prestar indagatoria sobre un suceso en que acababa de tener parte, y declarando manifestó, como advertido en la noche anterior, de que el mayoral de cierta gaudería había sido robado y clamaba á grandes voces pidiendo socorro, salió con varios vecinos de Rena en seguimiento de los ladrones; y habiéndoles dado alcance, por la circunstancia de haberse adelantado con su caballería á los que le acompañaban, se encontró con tres hombres armados, de los cuales el mas inmediato le apuntaba con una escopeta: que en tal situación le disparó un tiro, y como nadie acudiera á sus voces, viendo que los ladrones huían impunemente, les fué siguiendo hasta encontrarse con uno de ellos, el cual le hizo también la puntería con una escopeta, en cuyo momento el Alcalde usó de la suya á estilo de pistola y derribó de un tiro al malhechor, volviendo á derribarle de un culatazo en la cabeza tan pronto como este trató de incorporarse para hacerle fuego.

Se encontraron exactas y conformes todas las citas hechas por el Alcalde de Rena en su declaración, y el Juez solicitó para continuar el procedimiento la correspondiente autorización, que le fué denegada.

En atención á todo lo expuesto:

Vistos los artículos 1.º y siguientes de la Real orden de 26 de febrero de 1844, en la que se manda suspender y procesar á los Alcaldes en cuyo término se repitan con alguna frecuencia atentados contra la propiedad ó contra las personas:

Vista la Real orden de 11 de mayo de 1844 confirmatoria de la anterior, el artículo 66 de la Constitución de 1845 y los casos 4.º y 11.º del art. 8.º del Código penal, en los que se exige de responsabilidad al que obra en su propia defensa ó en cumplimiento de su deber:

Considerando que el Alcalde de Rena ejerció legítimamente su autoridad persiguiendo á los autores del expresado robo:

Que á no haber procedido con prontitud y energía, hubiera incurrido en responsabilidad, por cuanto en la misma noche del 7 de febrero había sido acometida por tres hombres la majada de Pedro Noasco de la Puente y herido un rabadán de un tiro, según informe del Promotor fiscal:

Que hiriendo mortalmente á uno de los malhechores, al ver tan en peligro su vida, hizo uso de su derecho legítimo, sin que pueda ponerse en duda la necesidad racional del medio que ha empleado para su defensa:

Que lejos de ser censurable tal conducta, fué digna de premio, toda vez que el Gobierno de S. M. condecoró á dicho Alcalde

en justa recompensa de tan importante servicio:

Las Secciones opinan que puede V. E. consultar á S. M. que se debe confirmar la negativa del Gobernador civil de Badajoz.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las Secciones citadas, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de junio de 1858.—Posada Herrera.—Señor Gobernador de la provincia de Badajoz.

Excmo. Sr.: Remitido á las Secciones reunidas de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo Real el expediente sobre autorización para procesar al Alcalde que fué de Pasaron en 1856, al Secretario y demás individuos de dicho Ayuntamiento, han consultado lo siguiente:

«Estas Secciones han examinado el expediente en virtud del que el Gobernador civil de la provincia de Cáceres concedió en parte autorización al Juez de Hacienda de aquella capital para procesar á D. Miguel María Torres, Alcalde que fué de Pasaron en 1856, al Secretario D. Julian Timon y á los individuos del Ayuntamiento que presidió dicho Alcalde, por abusos en el ejercicio de sus funciones.

De este expediente resulta, que el Alcalde y demás individuos del Ayuntamiento de Pasaron dirigieron en 8 de enero de 1857 al Gobernador de Cáceres una solicitud en la que se hacían á D. Miguel María Torres, Alcalde que había sido del mismo Ayuntamiento en el año anterior, los cargos siguientes:

1.º Haber cerrado una calle ó camino público sin otro fin que el de dar ensanche á una huerta de su propiedad.

2.º La traslación de una fuente por su propia y única utilidad, privando el uso de las aguas sobrantes á varios vecinos que habían comprado este derecho.

3.º La enajenación de terrenos de propios y comunes sin licitación ni formación de expediente y con posterioridad á la última ley de Desamortización.

4.º Haber emprendido obras públicas que no figuran en los presupuestos municipales.

5.º Haber arrendado una barra sin que conste el destino de la cantidad producida por este arriendo.

6.º La distracción de varias cantidades anticipadas para hacer frente á la epidemia del cólera, y de un donativo hecho al pueblo por S. M. la Reina con motivo de esta epidemia.

7.º No haber dado cuenta del valor de los suministros y de las cantidades recaudadas en la feria de Blanca.

8.º Haber exigido multa en dinero y hecho detenciones arbitrarias sin formación de causa.

Y 9.º Haber condenado á trabajos corporales en juicios de faltas.

Que el expediente gubernativo instruido sobre todos estos cargos pasó, por orden del Gobernador civil al Juez de primera instancia de Cáceres para la correspondiente formación de causa.

El Juez ordinario se inhibió de conocer sobre la mayor parte de dichos cargos, y admitida que fué la inhibición por el tribunal competente, se comunicaron los autos al Juez privativo de Hacienda; éste solicitó que se le autorizase para conocer y juzgar acerca de los cargos que correspondían á su jurisdicción, y el Gobernador de Cáceres le autorizó respecto de unos, y le denegó la autorización respecto de otros que creyó debían ser objeto de causa criminal ante el Juez ordinario, entendiéndose concedida la autorización solo para procesar al Alcalde D. Miguel María Torres.

En atención á lo expuesto:

Visto el art. 1.º del Real decreto de 27 de marzo de 1850, de donde se infiere que la autorización, una vez concedida

para procesar á funcionarios del orden administrativo, no puede ser revocada por el mismo Gobernador de quien precede:

Considerando:

1.º Que en el mero hecho de haberse comunicado al Juez de Cáceres el expediente gubernativo en cuestión para proceder sin trabas ni limitación alguna con arreglo á lo que dispone el Código penal, se autorizó de la manera mas amplia y absoluta para procesar á D. Miguel María Torres y demás individuos del Ayuntamiento de Pasaron que pudieran aparecer complicados.

2.º Que el separar los cargos cuyo conocimiento correspondía al Juez ordinario, de los que pertenecían al Juzgado de Hacienda, es una simple cuestión de competencia que no puede resolver el Gobernador, y que se encuentra ya prejuzgada por la Audiencia de Cáceres:

Las Secciones opinan que puede V. E. consultar á S. M. que no es necesaria la autorización solicitada por el Juez de Hacienda.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de junio de 1858.—José de Posada Herrera.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

Excmo. Sr.: Remitido á informe de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo Real el expediente sobre autorización negada por el Gobernador de la provincia de Orense al Juez de primera instancia de la capital para procesar á D. Deogracias Villabrile, agente investigador de memorias, fundaciones y obras pías y á los ejecutores D. Inocencio García y D. Tomas Gonzalez Vela por abusos en el ejercicio de sus cargos, han consultado lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Estas secciones han examinado el expediente de autorización, negada al Juez de primera instancia de Orense por el Gobernador de la provincia, para procesar á D. Deogracias Villabrile, agente investigador de memorias, fundaciones y obras pías y á los ejecutores D. Inocencio García y D. Tomas Gonzalez Vela, por atribuirseles excesos y abusos en el ejercicio de sus funciones, á saber: haber expedido apremios para qué no estaban autorizados.

En el expediente resulta: que en 15 de julio de 1853, José Alemparte, vecino de Banga, alcaldía y partido de Carballino, y Francisco Terreiro, de Boborás, en la parroquia de Jubencos del expresado partido, se quejaron al Juzgado de los ejecutores Villabrile, García y Gonzalez, que entendieron contra aquellos en las diligencias de apremio por atrasos de limosna ó estipendio de misas de que aparecía deudor al Alemparte y acusaron del delito de usurpación de atribuciones á Villabrile, y á los otros dos de los de estafas y excesos cometidos en el ejercicio de su cargo:

Que el R. Obispo de la diócesis, Presidente de la comisión investigadora, autorizó á D. Deogracias Villabrile para que ejercitase la vía de apremio contra los deudores morosos, y que alcanzó la referida autorización, según consta del oficio del Gobernador de la provincia, fecha 4 de marzo de 1854:

Que los comisionados no cometieron estafa ni aun siquiera percibieron parte de sus dietas, según opinó el Promotor fiscal; por lo que fué de dictámen que se debía declarar no haber lugar al procedimiento mientras los denunciados no especificasen clara y distintamente los cargos, y formalizasen su recurso con las protestas y solemnidades de ley:

Que decretado así, los interesados pidieron al Juzgado que el agente investigador y los comisionados ejecutores ó el Administrador y Presidente de la Comisión investigadora, presentasen los despa-

chos ejecutivos formados contra los mismos denunciados, reclamando al Gobernador de la provincia la instancia de queja que se le presentó en 8 de junio anterior, a lo cual se accedió y obra en las diligencias, compulsada dicha exposición en queja, por haber exigido a Alemparte lo que en su concepto no debían:

Que después de la práctica de varias diligencias a instancia de parte, se tomó la indagatoria a D. Deogracias Villabril, el cual protestó la diligencia por su cualidad de empleado, como recaudador y agente investigador de fundaciones piadosas del Obispado de Orense;

El Promotor fiscal opinó que en su cualidad de empleado público dependía exclusivamente del Ministerio de Gracia y Justicia, y en parte del Prelado diocesano, y en manera alguna, de la Autoridad civil de la provincia, por lo que no procedía pedir la autorización;

Que sin resolver el Juzgado sobre este incidente, mandó recibir declaraciones a los comisionados del apremio García y González Vela y a los denunciados Alemparte y Terreiro;

Que Villabril recurrió al Gobernador de la provincia quejándose de que se le había hecho declarar en causa en que era tratado como reo, y que había protestado por tener la cualidad de empleado dependiente de su autoridad, y en su consecuencia el Gobernador dirigió una comunicación al Juzgado, que el Promotor no estimó suficiente causa de inhibición; pero pidió que se contestase acompañando testimonio de los hechos por que se procedía contra el agente investigador Villabril, sin perjuicio de que este prestase declaración de inquirir, compeliéndosele a ello en caso necesario;

Y sin embargo, el Juez, desentendiéndose de este dictamen, pidió la autorización en la forma acostumbrada;

Que consultando el Consejo de provincia, opinó por la negativa de autorización, fundándose en que José Alemparte era en mayor o menor cantidad deudor en el concepto por qué fue ejecutado; que a la Administración correspondía compelerle al pago; que no había habido estafas por parte de los comisionados de ejecución; y por último, que tanto Villabril como aquellos habían obrado dentro del círculo de sus deberes, en conformidad con la legislación actual sobre la materia y con autorización competente;

Visto el preámbulo y art. 1.º del Real decreto de 27 de marzo de 1850, que limita a los Gobernadores de provincia y a los empleados y corporaciones dependientes de aquellos, por hechos relativos al ejercicio de sus funciones, la garantía de la ley;

Visto el art. 4.º del Real decreto de 10 de abril de 1852, que pone a las Comisiones investigadoras bajo la inmediata dependencia superior inspección de los diocesanos;

Visto el art. 15 del mismo Real decreto que establece que los recaudadores y agentes sean nombrados y removidos libremente por el Gobierno, pero que puedan suspenderlos en el ejercicio de sus funciones, caso de urgencia, los ordinarios, dando cuenta al Ministerio de Gracia y Justicia; y que los recaudadores y agentes nombrarán sus representantes con aprobación del Gobierno;

Considerando que no alcanza a dichos empleados, por su carácter especial de dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia, el beneficio introducido por el Real decreto de 27 de marzo de 1850;

Las Secciones opinan que puede V. E. consultar a S. M. no ser necesaria la autorización.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (que Dios guarde) resolver de conformidad con lo consultado por dichas Secciones, de Real orden lo comunico a V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de junio de 1858.—José de

Posada Herrera.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 2 de julio de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

Lo que se inserta en este Boletín para conocimiento del público. Orense 11 de junio de 1858.—El Gobernador, José Primo de Rivera.

Delinquentes aprehendidos.	Ladrones aprehendidos.	Reos prófugos aprehendidos.	Desertores aprehendidos.	Delinquentes por faltas leves y entregados a la Justicia.	Armas recogidas.	Contrabandistas aprehendidos.	Total de presos y delinquentes.	Total de presos condenados en el mes.
18	41	1	.	27	92	.	89	523

Estado numérico de las aprehensiones verificadas por la Guardia civil de esta provincia en el mes de mayo último.

ADMINISTRACION PRINCIPAL

DE HACIENDA PÚBLICA DE ESTA PROVINCIA.

El miércoles 7 del actual a las once de su mañana en el sitio acostumbrado se sacan a pública licitación varios géneros aprehendidos por contrabando y defraudación. Orense 1.º de julio de 1858.—Luis Romero.

Juzgado de Hacienda de Lugo.

Por este Juzgado se llama, cita y emplaza por el término de treinta días a la persona o sujeto que en los términos del Saviñao, hubiese abandonado un lio con géneros; bajo apercibimiento de que no cumpliendo con su presentación en el término señalado le parará el perjuicio que haya lugar. Dado en Lugo a 25 de junio de 1858.—José María Ulloa.—Por mandado de S. S., Francisco Abaín y Torres.

Juzgado 1.º de paz de Villanueva de los Infantes.

En este juzgado 1.º de paz se dictó la sentencia en rebeldía, que dice:

En la audiencia del juzgado 1.º de paz de Villanueva de los Infantes, a 22 de mayo de 1858, el Sr. D. Miguel Mourino, teniente de ejército retirado, juez de ella, por antemí secretario dijo: que habiendo visto la precedente acta de juicio verbal, de la que resulta, que Ramon Sousa, labrador y vecino de Espinosa, reclama de Doña Manuela Santos, vecina de Villar de Rey, de la alcaldía de Cénle, la cantidad de 361 rs. 16 mrs., importe de dos ollas y media y dos azumbres y media de vino, 2 rs. 22 mrs. de derechos que por renta debía de pagar a la obra pía de huérfanas de la Cuqueira en cada uno de los años de 1855 hasta el de 57 inclusive;

Resultando que a pesar de haber sido entregada la copia de papeleta de demanda de orden del Sr. Juez de paz 5.º de Cénle, según consta de las diligencias que obran por cabeza de este expediente, no se presentó la demandada ni persona que le representase;

Resultando que en vista de la falta de su presentación, el demandante ha justificado pertenecerle la renta que reclama, así como la legitimidad por documento fehaciente;

Resultando asimismo justificado que a la Doña Manuela Santos le corresponde pagar de renta la cuota de especie que se le reclama; é igualmente de que se presentó a la cobranza en tiempo oportuno según la costumbre, y que la demandada estuvo en la observancia de la paga hasta la fecha que se le reclama, que se marchó de Oleiros de Castrolé de Miño para Villar de Rey;

Resultando por documento público que los colonos están obligados a concurrir con dicha renta al sitio y tiempo de costumbre; y si no lo verificasen, pagarían los perjuicios que se irrogasen;

Resultando que por no haber vino en el país, se vende en él, del que viene de Castilla a 300 rs., sobre 10 mas ó menos según su calidad;

Considerando que sin embargo de que consta venderse el moyo de vino a 500 reales poco mas ó menos, solo se lo reclama a razón de 200 como precio mas equitativo que aquel, a respecto de las circunstancias en que se halla y obligación a que se refiere;

Considerando que la justificación es suficiente y extensiva a todos los particulares, así por documentos como testifical, debía de declarar y declara en rebeldía a la Doña Manuela Santos y le condena al pago de los 361 rs. y 16 mrs. reclamados dentro de seis días con las costas y perjuicios a que dió y diere lugar: notifíquese esta sentencia al demandante y por la demandada según lo previenen los artículos 1181, 1182 de la ley de enjuiciamiento civil. Y por esta definitivamente juzgando en primera instancia así lo pronuncia, manda y firma de que certifico.—Miguel Mourino.—Manuel Perez Lamela, secretario.

Y para que tenga efecto la preinserta sentencia, ruego a V. S. se digne mandar se le dé la publicidad debida en el Boletín oficial de la provincia.

Villanueva de los Infantes 26 de mayo de 1858.—Miguel Mourino.—Manuel Lopez Lamela, secretario.

Juzgado de paz de Nogueira de Ramuín.

En juicio verbal celebrado a instancia de Gregorio y Nazario Rodríguez, padre é hijo, vecinos del Val, contra D. Nicolás Soto, recayó la sentencia que dice:—Resultando que Gregorio y Nazario Rodríguez, padre é hijo, vecinos del Val, reclaman de D. Nicolás Soto, Sargento 2.º del regimiento de Toledo núm. 55, la cantidad de 568 rs.;—Considerando que en 19 del último mayo fué notificado en persona: considerando que por la disposición de dos testigos, consta adendar el dicho Soto al Nazario la cantidad reclamada, debía declararle y declara rebelde, y en su consecuencia le condena al pago de los 568 reales y las costas. Cuya sentencia se publique y notifique según los artículos 1185 y 1190 de la nueva ley:—D. Juan Andres Cerreda, juez 1.º de paz de Nogueira de Ramuín, así lo mandó y firmó en audiencia de 14 de junio de 1858 de que certifico:—Juan Andres Cerreda.—José Soto, secretario. Nogueira junio 25 de 1858.—V.º B.º—Juan Andres Cerreda.—D. S. O., José Soto.

Ayuntamiento de Amocero.

El repartimiento de lo que ha correspondido a este distrito municipal para los 50.000,000 de contribución territorial, se halla expuesto al público en la secretaría del ayuntamiento, durante ocho días. Las reclamaciones que se presenten en este término, serán resueltas en los dos primeros siguientes a la finalización del mismo, é inadmisibles las demás. Amocero junio 27 de 1858.—E. 1.º T. D. A., Narciso Araujo.

Idem de Ribadavia.

Los contribuyentes por inmuebles dentro del mismo, pueden si gustan enterarse del repartimiento adicional de la cuota cargada al distrito por el recargo de 50.000,000 sobre la territorial de este año, que se halla de manifiesto en su secretaría desde el 1.º al 6 del próximo julio, y deducir de agravios dentro de este término según lo previene el suplemento al Boletín núm. 64. Ribadavia junio 28 de 1858.—José Conde.

Idem de Maceda.

El repartimiento adicional correspondiente a los 50.000,000 se hallará de manifiesto en la secretaría de este municipio desde el día 4 al 12 del próximo julio a los efectos que procedan. Maceda 28 de junio de 1858.—El A. L., Meliton Rodríguez Arias.

Idem de Montederramo.

Este ayuntamiento y junta pericial han fijado los días desde el 4 al 9 inclusive del mes entrante julio, para oír las reclamaciones de agravios referentes al repartimiento adicional por el recargo de 50.000,000 que ha sufrido el cupo de dicha contribución correspondiente a este distrito que están confeccionando, durante cuyos seis días desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, se hallarán expuestos al público los repartos en la casa consistorial, y se resolverán por el ayuntamiento y junta pericial al efecto reunidos, las reclamaciones que se aduzcan. Y a fin de que llegue a noticia de los contribuyentes además de otras disposiciones adoptadas en las parroquias de este municipio para la debida publicidad, se anuncia por medio del periódico oficial de la provincia; con apercibimiento de que trascurrido dicho término se da por ultimada la publicación, sin admitir ulteriores reclamaciones. Montederramo 28 de junio de 1858.—El A. P., Domingo Perez.